

Estado moderno y protestas populares

Jeremi Suri

La historia de los Estados modernos es también la historia de las protestas populares. Desde su nacimiento tras la paz de Westfalia de 1648, los Estados soberanos de Europa y otras regiones del mundo han sobrellevado un proceso dialéctico de centralización política y contestación popular. Así explicaba Alexis de Tocqueville, cómo no, la Revolución Francesa. Los poderes en expansión de la monarquía francesa a lo largo y ancho de un país vasto y fragmentado crearon las conexiones que permitieron a los ciudadanos desafiar, por primera vez en la historia, a esa misma monarquía.

La centralización del poder político inspiró la organización de la oposición contra ese poder. Al exigir a los habitantes de Ruán, Tours o Burdeos que manifestasen su lealtad incondicional al rey, el Estado moderno hizo posible que esos ciudadanos le hiciesen llegar sus cada vez mayores exigencias. Cuando el monarca se mostró incapaz de satisfacerlas, dejó de parecer infalible y comenzaron a crecer las protestas y los conflictos. Los historiadores señalan que las instituciones del Estado moderno evolucionaron hasta ser capaces de gestionar las amenazas externas y los conflictos internos. El Estado moderno siempre ha encargado a sus fuerzas de seguridad neutralizar ambas amenazas.

Jeremi Suri es profesor de Liderazgo Global, Historia y Política Pública en la Universidad de Tejas (Austin).

La actual oleada de protestas populares se explica por la dialéctica entre autoridad central y contestación ciudadana, cuyo equilibrio impide cambios sustanciales. Será la sorpresa impredecible, no la sucesión ordenada de eventos, lo que provoque un cambio en el sistema.

Algunos observadores han calificado de positiva tal relación dialéctica entre centralización y contestación, considerándola fuente de vitalidad, crecimiento y capacidad de adaptación para el Estado moderno. La contestación pone en entredicho la rigidez y estancamiento de la forma única de gobierno y obliga a estos a cambiar, evolucionar y reinventarse, una y otra vez. Los Estados modernos deben adaptarse a las nuevas demandas de una ciudadanía empoderada y deben, en todo momento, ajustar sus métodos para mantener la legitimidad.

En efecto, a partir de 1648, los conflictos internos catalizaron gran parte de las transformaciones políticas más importantes, en Europa y otras regiones del globo.

Thomas Jefferson desarrolló ampliamente esta idea. En vísperas de la Revolución Francesa, escribía desde París sobre el valor político de los alzamientos populares: “Considero que es buena cosa una breve rebelión de cuando en cuando, y tan necesaria en el mundo político como lo son las tormentas en el mundo físico. Las rebeliones fracasadas suelen conllevar la usurpación de los derechos de quienes las promovieron. El acatamiento de tal realidad deberá mover al gobernante republicano honrado a mostrarse magnánimo en el castigo de la rebelión y a no desalentarla en demasía. Se trata de una medicina necesaria para mantener la buena salud del gobierno”.

Entre el ‘Leviatán’ y la voluntad general

Desde la Revolución Francesa hasta las primaveras árabes, los estadounidenses han apoyado en numerosas ocasiones la combinación de Estado fuerte y rebeliones frecuentes. Después de todo, así es como se fundó Estados Unidos: tras la revuelta contra el poder de Gran Bretaña y el periodo de aparente anarquía posterior a la marcha de los británicos. Los estadounidenses han defendido por regla general “el poder para el pueblo”, siempre que ese poder esté vinculado a un gobierno central fuerte que controle la violencia y proteja la propiedad. La contestación popular prohíbe la tiranía y el gobierno central evita el caos.

Esta es la posición intermedia que los “liberales” adoptan, a medio camino entre el *Leviatán* de Thomas Hobbes y la voluntad general de Jean-Jacques Rousseau. La han compartido presidentes estadounidenses de distinta orientación ideológica, como Ronald Reagan, Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama. Los cuatro alentaron levantamientos populares en el extranjero en pos de la “democratización”, pero también prestaron apoyo a los gobiernos centrales para que pudiesen canalizar el impulso popular y transformarlo en seguridad y progreso. Lo mismo puede decirse de las políticas exteriores puestas en práctica por la mayoría de Estados europeos a lo largo de las últimas dos décadas. Los líderes políticos de Berlín, Londres, París y Madrid protegen los derechos humanos de los ciudadanos de otros países, especialmente en casos de genocidio, pero prefieren siempre dejar la defensa de un orden social justo en manos de Estados y gobiernos sólidos. La lucha por los derechos humanos está muy integrada en el sistema mundial de Estados-nación. Ni siquiera los actores internacionales más idealistas consideran que dicha lucha pueda representar una alternativa al Estado-nación.

Hallamos quizá en la Unión Europea la manifestación más clara de este fenómeno. La UE aspira a un ordenamiento común europeo, especialmente en materia económica y política, y busca también preservar asimismo la especificidad cultural de cada sociedad. Al mismo tiempo quiere empoderar a los ciudadanos, especialmente en los antiguos países comunistas, y hacer valer sus derechos e intereses, por encima de los gobiernos nacionales. Por ejemplo, la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE afirma –como la Declaración de Independencia de EE UU– la existencia de “valores indivisibles y universales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad”, que los gobiernos deben respetar. Así pues, ciudadanos de países tan



Manifestante sobre una valla en las orillas del Nilo durante los enfrentamientos contra la policía antidisturbios (El Cairo, 2013).GETTY

diversos como Grecia, Portugal o Bélgica pueden invocar ese instrumento para protestar contra posibles atropellos cometidos por los gobiernos nacionales, como han hecho, por ejemplo, independentistas escoceses y catalanes. En años recientes, las ciudadanías de diferentes países y regiones han apelado a los valores universales patrocinados por la UE para criticar las medidas políticas y económicas impuestas por la propia Unión.

La lucha por los derechos humanos se ve fortalecida por las modernas formas de buen gobierno, pero plantea asimismo un reto a las administraciones. No debe sorprendernos la profusión de protestas populares en sociedades europeas y norteamericanas como España o Canadá, cuyos líderes se han mostrado particularmente francos en su respaldo a los derechos de individuos y comunidades en otros países. Los Estados idealistas en su política exterior propugnan la aparición de críticos idealistas –y capaces– fronteras adentro. La reciente multiplicación de las protestas es reflejo de esa propagación de las demandas que el individuo hace al Estado y que al mismo tiempo ese mismo Estado apoya. El actual clima de agitación es el eco contemporáneo de las observaciones hechas por Tocqueville sobre cómo la propagación de la palabra del monarca francés hizo posible la revolución contra la monarquía.

Autoridad y contestación

Este es el prisma desde el que debemos interpretar la actual oleada de protestas populares en países de todo el mundo. Somos testigos de una agudización de la dialéctica entre autoridad centralizada y contestación popular, entidades ambas que se expanden al unísono y se nutren de los mismos factores. La educación moderna prepara al ciudadano para informarse e intercambiar opiniones y permite a activistas y líderes gubernamentales crear propaganda más efectiva. Los actuales medios de comunicación facilitan la difusión y la organización de grupos dispersos, pero también proporcionan al Estado herramientas de vigilancia cada vez más eficaces, como descubrimos con cada nueva noticia sobre las actividades de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense.

Son las posibilidades de la rebelión, en sus distintos formatos políticos y culturales, lo que inspira a los diversos actores, sin salir no obstante del concepto de Estado-nación con gobiernos centralizados. La gran mayoría de activistas ciudadanos no conciben un mundo sin los Estados contra los que se movilizan; esto es así incluso en los casos de guerra civil: en Libia y en Siria, las distintas facciones luchan por controlar el Estado, no por sustituirlo con otra cosa. Las ideas que impulsan conductas antiestatales paradójicamente refuerzan otra idea, la de que el gobierno estatal es necesario.

Nos encontramos pues ante una coyuntura dialéctica clásica. La contradicción entre autoridad y contestación no es en absoluto nueva, pero se manifiesta más vívida y profusamente que nunca gracias a los medios de comunicación y las redes sociales. Los acontecimientos parecen sucederse más rápido que nunca debido a la velocidad de las comunicaciones entre actores y observadores clave. Casi todos los días aparecen en las pantallas de todo el mundo titulares sobre nuevas protestas y también sobre la consolidación de nuevos poderes estatales. En Rusia, Pussy Riot y la tenaz autoridad ejercida por Vladimir Putin; en Egipto, el derrocamiento de Hosni Mubarak y el golpe militar... Ocurre de todo en las calles y muy poco en las sedes gubernamentales. Mismo perro con distinto collar.

Los activistas ciudadanos se muestran capaces de movilizar a sus partidarios en acciones efectivas, deponiendo gobiernos en Oriente Próximo, por ejemplo, pero sus esfuerzos por alumbrar soluciones innovadoras se han revelado infructuosos. En consecuencia, el poder estatal se ha puesto en marcha de manera rápida y efectiva en esa y otras regiones. Como poco, la agudización de la dialéctica entre Estado centralizado y contestación

popular ha fortalecido ambas dinámicas históricas. Se da actualmente cierta simetría entre las dos, en sociedades tan dispares como Egipto, Tailandia o Ucrania. El poder de la calle limita las posibilidades de represión estatal, como se ha demostrado en estos países. Al mismo tiempo, el poder de la autoridad estatal, incluido el militar, restringe las posibilidades de transferir poder político a los nuevos grupos, algo que también se ha podido evidenciar en los países citados.

Esta simetría explica por qué levantamientos tan viscerales y a menudo ilusionantes como los producidos de Túnez a Brasil, pasando por Portugal, no derivan en cambios sustanciales. Las turbulencias políticas del mundo actual son reales y fascinantes, pero terminan cayendo en un sorprendente inmovilismo. Contrariamente a la optimista creencia de Jefferson, las revueltas internas no traen consigo reformas estatales. Al contrario: están reforzando la dinámica de acción-reacción. EE UU es un ejemplo excelente a ese respecto. El movimiento Occupy, a la izquierda política, y el Tea Party, a la derecha, han presionado para rediseñar la política fiscal y recortar la agenda política exterior estadounidense. Los activistas han recibido apoyo de muchos partidarios, pero asimismo han provocado que el gobierno de Obama y algunos republicanos moderados se ratifiquen en un sólido compromiso con las actuales políticas fiscal y exterior. El estancamiento político en EE UU es en parte partisano, pero en el fondo tiene que ver con un equilibrio inmovilista entre quienes piden cambios fundamentalmente en política económica y exterior y quienes temen perder sus actuales prerrogativas en el país o fuera. En ambos extremos de este *impasse* se posicionan tanto demócratas como republicanos, lo que complica los esfuerzos por poner en marcha cambios en un sentido o en el otro.

Este mismo análisis puede hacerse al otro lado del océano Atlántico. Los euroescépticos de izquierda y derecha comparten las críticas por las divergencias fiscales que han acompañado la unión monetaria continental. Los ciudadanos que se manifiestan contra las políticas de austeridad en Grecia, Portugal, Italia y España ven en los recortes exigidos para cubrir su deuda un auténtico peligro. En Alemania, los críticos consideran que las exigencias

La gran mayoría de los ciudadanos no concibe un mundo sin los Estados contra los que se movilizan, incluso en los casos de guerra civil

de gasto que se hace a las economías del norte europeo, más productivas, son inútiles y no suponen sino una amenaza. Ambos bandos intentan proteger su forma de hacer política y de gastar dinero, ante una serie de profundos cambios que tienen como objetivo la supervivencia del euro. Como en EE UU, el debate sobre esos cambios levanta pasiones y muchas veces llega a las calles. Se trata de un conflicto especialmente difícil de resolver, pues las exigencias populares van directamente en contra de los intereses de los Estados de Europa en lo que se refiere al proyecto de unión monetaria y política continental. En los polos no están la “Europa buena” y la “Europa mala”, sino la exigencia ciudadana de poner coto a la austeridad, por un lado, y las demandas de los Estados al respecto de la disciplina fiscal y presupuestaria, por otro. Ambos extremos se hallan prácticamente en equilibrio, de modo que los acontecimientos evolucionan muy lentamente.

¿A la espera del gran cambio?

No cabe esperar grandes cambios geopolíticos hasta que aparezca un elemento exógeno, ajeno a la dialéctica histórica. Será la sorpresa impredecible, y no la actual sucesión estructurada de eventos, lo que provoque un cambio en el sistema. Así es como se han producido antaño las transformaciones en la naturaleza de la autoridad estatal. Los ejemplos más recientes son la depresión económica de los años treinta, que afectó a todo el planeta, y la caída del comunismo, entre 1989 y 1991.

En el primer caso, el crac de los sistemas financiero y monetario de 1929 desencadenó la vuelta a los aranceles elevados, el acopio de capitales y la gestión cuasi militar de las economías nacionales, especialmente en los nuevos Estados fascistas. Las necesidades sufridas por la población dieron pie a la puesta en marcha de exhaustivos programas de empleo, educación pública, vivienda y alimentación. La reacción de los Estados ante la depresión y las medidas en pro de la ciudadanía contribuyeron al estallido de la guerra mundial y, de manera más permanente, a la aparición de un nuevo paradigma político que los especialistas pronto bautizarían como “Estado del bienestar”. Los gobiernos centrales se encargaron de gestionar la actividad económica, gravando más al ciudadano e invirtiendo directamente en el crecimiento industrial. Estas herramientas keynesianas conllevaron la gran expansión de muchos Estados en la posguerra.

Al mismo tiempo, ese Estado de posguerra debía dar cuenta, más que nunca, del bienestar ciudadano. La legitimidad del gobierno central dependía

de que se demostrase capaz de mejorar las condiciones de vida o de funcionamiento de diversas entidades: empresas, trabajadores, familias, niños, veteranos de guerra. De igual modo, países de todo el mundo desarrollado vertieron los recursos estatales en programas educativos, de seguridad social y de pensiones. Estos programas constituyen las mayores partidas en casi todos los presupuestos estatales hoy día, hasta en EE UU, e imponen restricciones a la libertad de los líderes –incluso neoconservadores– para la readjudicación de recursos. La lucha por el bienestar social –que tiene su origen último, pues, en la depresión económica– redibujó los límites del Estado y rediseñó su poder y sus elementos constitutivos ciudadanos, con resultados que perduran.

Podríamos hacer un análisis parecido, aunque quizá no tan universal, de los efectos de la caída del comunismo, entre 1989 y 1991. El veloz declive de las economías planificadas que orbitaban en torno a la Unión

Soviética y su posterior desintegración permitieron el florecimiento de ideologías liberales en Europa, Asia, América Latina y, especialmente, América del Norte. Triunfaban la iniciativa individual y la competencia empresarial en detrimento del control gubernamental: habíamos llegado al “fin de la historia” de Francis Fukuyama. La ciudadanía largamente reprimida de los países de Europa del Este y de algunos países de Asia y América Latina exigían más libertad en pos de satisfacer sus intereses individuales, adquirir propiedades, incluso enriquecerse. Los gobiernos más ricos y poderosos –en especial en EE UU, Reino Unido y Alemania Occidental– fomentaron esta forma de hacer política. Era la edad de oro de la redefinición del Estado como facilitador de mercados y del ciudadano como productor y consumidor. El llamamiento a la justicia y la equidad perdió terreno ante la demanda, ciudadana y gubernamental, de innovación, emprendimiento y, sobre todo, maximización de beneficios.

El Estado del bienestar no se disipó, sin embargo, en esa exaltación del mercado libre. Al contrario, la incertidumbre impuesta por los mercados empujó a cada vez más ciudadanos a pedir que se garantizaran seguridad social, pensiones y otras prestaciones. Las prestaciones por desempleo, por

Los ejemplos más recientes de grandes transformaciones en la naturaleza estatal son la Gran Depresión y la caída del comunismo

ejemplo, crecieron durante los años noventa en casi todas las sociedades avanzadas, con el objetivo de asistir a los ciudadanos que perdían su trabajo debido a las transformaciones económicas. El mercado libre no socavó la cooperación entre Estado y representantes ciudadanos, apuntalada sobre estructuras del Estado del bienestar anterior. En su lugar, el mercado libre impulsó una combinación de agresivas reformas encaminadas a ampliar la libertad económica, fortaleciendo a la vez la protección contra las adversidades. En periodos de crecimiento, los Estados ricos y sus poblaciones podían permitirse esta mezcolanza, a la vez rentable y segura, que satisfacía las necesidades de los líderes gubernamentales y los diversos grupos ciudadanos.

La grave recesión económica de 2008 puso punto final al crecimiento y al optimismo del periodo posterior a la guerra fría, tan propicio para el libre mercado. Muchas de las protestas en Europa y otros continentes surgen como reacción a la severidad de la actual situación económica. Los estadounidenses siguen esforzándose igualmente por reconsiderar sus objetivos políticos, tras hacerse cargo de que incluso en su país los recursos son limitados. Atrás quedaron los días en que el gobierno estadounidense redoblaba tambores de guerra en solitario mientras animaba a sus conciudadanos a irse de compras. Los Estados más fuertes parecen haber perdido poder y sus ciudadanos se movilizan para exigir protección ante potenciales necesidades.

Impulso reformista

En ese sentido, gran parte de las protestas que se producen hoy no son una revolución, sino, desde un prisma marxista, la lucha de la burguesía por conservar sus derechos adquiridos. La ciudadanía está descontenta con sus gobiernos y les teme menos. Pero no propone sistemas políticos y económicos radicalmente nuevos. Aunque los manifestantes critiquen a sus gobernantes, en general lo que piden es un gobierno responsable que sirva a sus intereses. Quieren políticos que reaccionen ante sus exigencias y no necesariamente formas de gobierno absolutamente innovadoras. Quienes protestan comparten en su mayoría las visiones básicas sobre política económica de sus líderes, otra simetría característica de la situación actual.

El reformismo político recibirá un impulso importante cuando, como ya ha ocurrido en el pasado, un acontecimiento o serie de acontecimientos provoque una revisión fundamental en las ideas de líderes estatales y activistas ciudadanos. Ese momento de creatividad no ha llegado aún, pese al activismo desplegado en las calles en los últimos años. ¿Desde dónde

llegará, entonces? ¿Cómo será? No podemos estar seguros. Como historiadores, no obstante, debemos esperar lo inesperado (y alentarlo).

Algunos de los pensadores políticos más creativos trabajan en sociedades dinámicas que no obstante mantienen un alto nivel de represión, como China y Rusia. Aunque las protestas en esos países son intermitentes y poco consistentes, dan muestras de una resistencia y una sofisticación prometedoras. Los ciudadanos implicados en esos movimientos en ciernes han accedido al pensamiento global, cuentan con recursos, poseen herramientas políticas y tienen el tiempo de su parte. Pese a la fuerza represora de los gobiernos ruso y chino, sus líderes se enfrentan a graves desafíos demográficos que complicarán su actividad política en los próximos años. Definitivamente, la nueva ciudadanía tendrá nuevas inquietudes que los siguientes gobiernos deberán resolver no sin grandes dificultades. Tales condiciones, impulsadas no tanto por la ideología como por la demografía, ofrecerán ventajas y potenciales oportunidades –originadas en la asimetría– para una contestación ciudadana creativa, dentro de la dialéctica, antigua de siglos, entre Estado moderno y protesta popular. Cabe esperar, por fin, que las protestas traigan más consecuencias en aquellos lugares en que hoy son menos toleradas.